

Santiago, cuatro de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Demanda. Compareció don Guillermo Reyes Arredondo, Inspector Provincial del Trabajo (S), en representación de la **INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO**, ambos con domicilio en calle Moneda 723, comuna y ciudad de Santiago, interponiendo solicitud de disolución de organización sindical en contra de **ASOCIACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE GENDARMERIA DE CHILE**, Registro Asociación de Funcionarios (RAF) N° 9301.0276, representada por su Presidente José Guillermo Donoso Gutiérrez, ignora profesión u oficio, ambos con domicilio en calle Blas Cañas 431, Comuna y Ciudad de Santiago, por haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para su constitución, en razón a que en la actualidad su quórum es inferior al dispuesto por la ley para su constitución.

Solicita que, en definitiva, se declare lo siguiente:

1. Que la asociación de funcionarios demandada ha dejado de cumplir con los requisitos necesarios para su constitución, en razón a que en la actualidad no cuenta con el mínimo de socios que la ley le exige para su mantención, y de acuerdo a ello, la declare disuelta por haber concurrido con la causal legal antes señalada.

2.- Que se remita copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo para los efectos de proceder a eliminar a la organización sindical del registro correspondiente.

3.- Que se nombre liquidador de los bienes de la asociación, para efectos de llevar a cabo la liquidación correspondiente a su patrimonio, proponiendo a doña Mónica Venegas Palacios, jefa de Relaciones Laborales de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago.

Expone que con fecha 09 de junio de 2015 se constituyó la Asociación Nacional de Trabajadores de Gendarmería De Chile, depositando sus estatutos en la Inspección



Provincial del Trabajo de Santiago, oportunidad en que se eligió una directiva sindical. El sindicato se constituyó con un total de 30 socios. Con fecha 31 de agosto de 2021, se llevó a cabo la última renovación del directorio de la organización demandada, para el período 3 al 18 de agosto de 2021 a 31 de agosto de 2023, oportunidad resultaron electos don José Guillermo Donoso Gutiérrez, don Ricardo Andrés Castilla Venegas y don Rolando Darío Cerda Fuentes, en calidad de Presidente, Tesorero y Secretario, respectivamente. Con motivo de los antecedentes señalados, se inició una investigación a la organización de funcionarios para determinar si cumplía con los requisitos legales para su existencia. Conforme a lo anterior, se designó al fiscalizador de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, don Alexis Díaz Ampuero, a fin de que verificara lo anterior.

Explica que el funcionario individualizado procedió a revisar los antecedentes de la Asociación Nacional de Trabajadores de Gendarmería de Chile que se registran en la Unidad de Relaciones Laborales de la Inspección como en el sistema informático de la Dirección del Trabajo SIRELA, pudiendo verificar que en la última renovación de Directorio sólo concurrieron a las votaciones 46 funcionarios, lo que pudo verificar de la respectiva acta de escrutinio depositada por la propia organización en las oficinas de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago.

Por otra parte, y a fin de contar con mayores antecedentes sobre la materia, se verificó la cantidad de funcionarios con que cuenta Gendarmería de Chile, pudiéndose constatar que son 21.000 funcionarios. Todos estos antecedentes constan en el informe de fiscalización emitido por el funcionario actuante, dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, el cual goza de presunción legal de veracidad establecida en el artículo 23 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, la que opera para todos los efectos legales, incluso para la prueba judicial.

Conforme a la normativa legal, al momento de la fiscalización Gendarmería de Chile contaba con un total de 21.000 funcionarios de planta y a contrata, por lo cual era necesario que la Asociación demandada tuviera al menos 250 socios para cumplir el requisito de existencia requerido en el art.13 de la ley N° 19.296, sin embargo y como ya se ha señalado, solo cuenta con 46 socios que ostentaban la calidad de funcionarios de dicho Servicio, con lo que claramente no cumple con el requisito exigido.



Mediante resolución de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno se citó a las partes a la audiencia única de contestación, conciliación y prueba.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Audiencia única de contestación, conciliación y prueba. Que la referida audiencia se llevó a cabo con la comparecencia de ambas partes.

Se confirió traslado y la **demandada contestó** mediante minuta escrita, que en síntesis, expone lo siguiente:

Indica que con fecha 09 de junio de 2015 se constituyó la Asociación Nacional de Trabajadores de Gendarmería de Chile, depositando sus estatutos en la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, oportunidad en que se eligió su directiva sindical. Ingresando al Registro de Asociación de Funcionarios (RAF), con el N° 9301.0276. 2.

Luego, con fecha 31 de agosto de 2021, se realizó la última renovación del Directorio de la Organización demandada, para el período del 18 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2023, oportunidad en que resultaron electos don José Guillermo Donoso Gutiérrez, don Ricardo Andrés Castilla Venegas y don Rolando Darío Cerda Fuentes, en calidad de Presidente, Tesorero y Secretario, respectivamente.

Precisa que su representada, al momento de constituirse lo hizo con 30 socios. Lo anterior, con pleno conocimiento de la Inspección de Trabajo, transcurrido el plazo, la institución formuló observaciones a la constitución, pero se reclamó de ello ante tribunales y el juez acogió la reclamación interpuesta por la Asociación y la tuvo por constituida.

Con posterioridad, después de varias elecciones para cambiar el Directorio de la Asociación Nacional de Trabajadores de Gendarmería de Chile y que es por espacio superior a cinco años, la inspección del Trabajo presenta esta solicitud de disolución de la organización sindical, a pesar de que la Asociación no ha transgredido lo dispuesto en el Art. N° 61 de la Ley N° 19.296 letras c), d) ni e) como está planteado en la demanda. Precisa que no existe ningún incumplimiento grave a las disposiciones legales y reglamentarias, no han disminuido los socios desde la fundación, por el contrario han ido creciendo en número



Señala que existen otros intereses de la Dirección Nacional de Gendarmería, porque ha habido una campaña sistemática y continuada en inmiscuirse en las diferentes asociaciones Gremiales de la cual no está exenta esta Asociación Nacional de Trabajadores de Gendarmería de Chile. Esta fiscalización ha sido instruida por la Inspección del Trabajo a solicitud expresa del Director Nacional de Gendarmería de Chile, don Cristián Alveal Gutiérrez, cuyo fin tiene pedir la disolución de su representada.

Concluye solicitando tener por contestada la demanda, rechazando la misma en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Llamadas las partes a conciliación: resultó frustrado.

Se estableció como **hecho pacífico** que con fecha 09 de junio de 2015 se constituyó la Asociación Nacional de Trabajadores de Gendarmería De Chile, depositando sus estatutos en la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, se constituyó con un total de 30 socios.

Por su parte, se fijó como **hecho a probar**: Cantidad de funcionarios actualmente asociados a la Asociación de Funcionarios (RAF) N° 9301.0276.

SEGUNDO: Medios de prueba de la parte demandante. A fin de acreditar sus pretensiones, la demandante incorporó los siguientes medios de prueba:

Documental

1. Fotocopia de Informe de fiscalización.

2. Impresión de la Ficha de Organización Sindical de la Asociación Nacional De Trabajadores de Gendarmería De Chile, Registro Asociación de Funcionarios (RAF) N° 9301.0276.

TERCERO: Medios de prueba de la demandada. Para acreditar sus pretensiones, la demandada incorporó los siguientes medios de prueba:

Documental:

1.- Certificado de vigencia de la Asociación Nacional de Trabajadores de Gendarmería de Chile.



2.- Ord. N° 753 de la Dirección Nacional Gendarmería, enviado a la Directora Del Trabajo, de fecha 13 de mayo de 2021.

3.- Listado de socios Antrag.

Y se trajo a la vista la causa Rit N° I-394-2015 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Además, rindió prueba testimonial, compareciendo don Héctor Paredes Sepúlveda Rut N° 9.524.722-9, quien previamente juramentado, declaró ser socio desde su fundación el 09 de junio de 2015. Fueron 30 socios a la constitución, se depositaron los estatutos al día siguiente según recuerda. Precisa que se han hecho 3 renovaciones de la directiva a la fecha, no se había objetado el quórum. Actualmente son sobre 100 socios, unos 156. Al **contrainterrogatorio** especifica que es socio fundador de la Asociación Nacional de Trabajadores de Gendarmería de Chile, hasta que se retiró, y sigue participando en algunas actividades. Se retiró de Gendarmería el 01 de junio de 2016. Sabe la cantidad de socios porque participa esporádicamente, se ayuda a funcionarios retirados en diversas actividades, ese rol social es el que acompaña.

CUARTO: Respecto al hecho controvertido en este juicio, esto es, la Cantidad de funcionarios actualmente asociados a la Asociación de Funcionarios (RAF) N° 9301.0276., la demandante acompañó una ficha de organización sindical, donde consta que en la última renovación de directorio, el 31 de agosto de 2021, votaron 47 personas.

Respecto al Informa de Fiscalización incorporado, se dio inicio a la misma debido a la solicitud del Director Nacional de Gendarmería, requiriendo la disolución de la organización sindical en cuestión. En el Informe de Exposición, se precisa que la asociación se fundó el 09 de junio de 2015 con 30 socios, siendo validada por sentencia judicial del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y que la materia a investigar era la legalidad de la constitución de la asociación de funcionarios.

El informe señala que *“la asociación no cumplía con el requisito de constitución, porque por lógica se puede conferir (sic) que, en 2015, había un número de funcionarios mayor a 8.852 funcionarios de los existentes en 1999 e inferior o similar a los 21.000 funcionarios de 2019. El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la causa RIT I-394-2015, RUC: 15-4-0050584, permitió la vigencia de la asociación investigada.”*



Luego, al concluir el informe, reitera que la fiscalización investigativa es una investigación sobre la legalidad de la constitución de la asociación de funcionarios.

En cuanto al lista de socios que acompañó el demandado, es un documento de 36 páginas, que no tiene fecha cierta, ni números correlativos que permita identificar la cantidad exacta de funcionarios a la fecha de la fiscalización ni interposición de la demanda, motivo por el cual no será considerado en el análisis probatorio del punto controvertido en cuestión.

En relación al Certificado de vigencia de la Asociación Nacional de Trabajadores de Gendarmería de Chile, solo consta la elección del Directorio, no refiere el número de asociados, pero en las páginas siguientes consta un acta de comparecencia ante la Dirección Regional Metropolitana Poniente, de 17 de agosto de 2021, en donde se señalan que se exhibe documento actualizado con 123 socios y solicitudes de afiliación del año 2020 por un total de 26 más. En cuanto al Ordinario. N° 753 de la Dirección Nacional Gendarmería, enviado a la Directora Del Trabajo, de fecha 13 de mayo de 2021, se refiere a la interpretación que hace Gendarmería en relación a la cantidad de socios que debiese tener la asociación para mantener su vigencia.

Así las cosas, de la prueba rendida por ambas partes y analizada en su conjunto, se puede concluir que actualmente la asociación tiene alrededor de 123 socios.

QUINTO: Que para la adecuada resolución de la cuestión sometida al conocimiento del tribunal, conforme al artículo 19 N°19 de la Carta Fundamental, se reconoce el derecho de todas las personas a sindicarse en los casos y forma que señale la ley, reconociéndose como un prisma o base fundamental dentro de este derecho, el principio de la libertad sindical, esto es, la facultad o prerrogativa de todo trabajador de afiliarse voluntariamente a la organización sindical que elija libremente, a permanecer en ella y a desafiliarse cuando lo decida sin restricciones ni prohibiciones de ninguna especie, salvo aquellas derivadas de sus estatutos.

Por su parte, la libertad sindical se encuentra reconocida además a nivel normativo en el artículo 214 del Código del Trabajo, que, contempla no sólo el carácter voluntario, personal e indelegable de la afiliación a un sindicato, sino que también, la prohibición de establecer límites y restricciones para concretar la desafiliación de un trabajador a una



determinada organización sindical. En el mismo sentido, la Ley N° 19.296 en su artículo 1° reconoce a los trabajadores de la Administración del Estado, incluida las Municipalidades y del Congreso Nacional el derecho de constituir, sin autorización previa, las asociaciones de funcionarios que estimen conveniente, con la sola condición de sujetarse a la ley y los estatutos de las mismas. Luego, el artículo 3 del mismo cuerpo legal dispone que la afiliación a una asociación de funcionarios será voluntaria, personal e indelegable lo que deriva necesariamente en la prohibición consignada su artículo 5° en cuanto que no se podrá condicionar el empleo de un trabajador a la afiliación o desafiliación a una asociación de funcionarios y asimismo prohíbe impedir o dificultar su afiliación o perjudicarlo en cualquier forma por causa de su afiliación o de su participación en actividades de la asociación.

En el mismo sentido, el reconocimiento del derecho de sindicalización comprende una serie de garantías que se aplican tanto la organización como a sus miembros y que incluyen la efectiva protección de su ejercicio; así, el ejercicio de la libertad sindical importa para el trabajador la titularidad de derechos subjetivos públicos con características propias vinculados a otros derechos de igual jerarquía e imprescindible para su ejercicio.

SEXTO: Además, es importante tener presente que en diversas convenciones suscritas por la Comunidad Internacional de Naciones y entre ellas nuestro país se reconocen entre los derechos fundamentales, los derechos sindicales en sus aspectos institucionales de acción colectiva, de autotutela consagrándose de este modo el deber de los estados partes de reconocerlos y de adoptar las medidas destinadas a garantizarlos. Lo anterior deriva del hecho que la libertad sindical es un principio universal consagrado internacionalmente por diversas declaraciones y Tratados Internacionales entre ellas los convenios de la OIT N° 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación y N° 98 sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva. Por su parte, en cuanto a la Administración Pública, el Convenio N° consagra la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública, que consagra entre sus disposiciones, entre otras normas, que los empleados públicos deben gozar de la adecuada protección contra todo acto de discriminación antisindical en relación con su empleo; protección que debe comprender todo acto que condiciona el empleo o importe



perjuicio o el despido de un trabajador en razón de la afiliación a un sindicato o de su participación en actividades sindicales y asimismo que las organizaciones de empleados públicos deben gozar de completa independencia respecto de las autoridades públicas y de adecuada protección contra todo acto de injerencia de una autoridad pública en su constitución, funcionamiento y administración entre otras.

Los referidos Convenios se encuentran ratificados por Chile y, en consecuencia conforme lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución Política de la República, es deber de los órganos del Estado, el respetar y promover tales derechos garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Derechos sindicales que asimismo se consagran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23 punto 4, en cuanto al derecho a fundar sindicatos y sindicarse y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre consagra en su artículo XXIII el derecho a asociarse sindicalmente.

De este modo el Estado de Chile está obligado a cumplir los Convenios ratificados no pudiendo invocar disposiciones de derecho interno para justificar su incumplimiento de modo tal que las normas auto ejecutables de los convenios ratificados se han incorporado al derecho interno obligando a los órganos del Estado al respeto y promoción de la libertad sindical.

SÉPTIMO: En este sentido, el reconocimiento, protección y promoción de la libertad sindical como derecho y deber del Estado chileno y de sus instituciones, importa la implementación de una serie de garantías que hagan efectivo el ejercicio de tal derecho, obligando a los órganos del Estado y a toda persona institución o grupo y su infracción produce las responsabilidades y sanciones legales, y a este respecto la tutela legal de la libertad sindical además de los instrumentos previstos en la propia Constitución en el artículo 20, se expresa en la actuación de los órganos jurisdiccionales como de los servicios administrativos del Estado, en este caso a través de la Dirección del Trabajo, como servicio público descentralizado que forma parte de la Administración del Estado, la cual tiene la obligación constitucional y legal de respetar y promover los derechos sindicales. En efecto, el D.F. L N° 2 Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, establece dentro de sus funciones el velar por el cumplimiento de la legislación laboral, previsional y de seguridad y salud en el trabajo y promover el ejercicio pleno de la libertad sindical, fomentando el diálogo social, fortaleciendo sistemas de prevención y solución alternativa



de conflictos, que permita relaciones más justas y equitativas entre trabajadores y empleadores. En este mismo sentido, dentro de sus objetivos específicos, están las de promocionar la organización sindical y la libertad sindical, a través de la defensa de la libertad sindical y del incremento de la capacitación, difusión y atención a los actores sindicales. Funciones que además, en el caso de la Dirección del Trabajo, encuentran su correlato en la obligación de tutelar y velar por la adecuada protección contra todos los actos contrarios a la libertad sindical y que pudieran ser constitutivos de prácticas antisindicales o desleales, tal como lo dispone el artículo 292 del Código del Trabajo.

OCTAVO: En este sentido, si bien conforme lo previene el artículo 297 del Código del Trabajo la disolución de un sindicato puede ser solicitada al tribunal competente por la Dirección del Trabajo o por cualquiera de sus socios, dicha petición debe ser fundada y basada en el incumplimiento grave de las obligaciones que le impone la ley o por haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para su constitución, siendo este último el fundamento invocado por la demandante para el presente caso.

Esta facultad de la Dirección del Trabajo se replica en idénticos términos en el artículo 62 de la Ley N°19.296 sobre asociación de Funcionarios de la Administración del Estado, otorgando de este modo titularidad a la Dirección para solicitar la disolución de un sindicato o de una asociación gremial. A este respecto, se estableció como un hecho no discutido en la respectiva audiencia especial que la demandada se constituyó con fecha 09 de junio de 2015, con un total de 30 socios. Dicha validez de constitución fue ratificada por juez competente, por cuanto acogió la reclamación interpuesta por la asociación, declarando expresamente la vigencia de la misma.

Sin embargo, a la fecha, los socios han aumentado desde su constitución, siendo al menos unos 123, como refiere el acta de comparecencia ante la Dirección Regional Metropolitana Poniente, de 17 de agosto de 2021, lo que además se ratifica con la declaración del testigo de la demandada.

NOVENO: En cuanto a la acción de disolución, de que es titular la Dirección del Trabajo, para estimar configurada la causal prevista tanto en el artículo 297 del Código del Trabajo como en la letra d) del artículo 61 de la Ley N° 19.296, la procedencia de la misma no se satisface con la mera constatación de la disminución del número de socios por debajo de los quórum requeridos para su constitución, ello en atención, a que tal



como lo dispone el artículo 61 referido precedentemente constituye una facultad para la Dirección del Trabajo y no un deber propiamente tal. Por el contrario, dicha facultad se opone al deber legal y constitucional de promover y asegurar el debido ejercicio de la libertad sindical, aunque sean menos socios de los que exigiría la ley de socios. En la especie, el ejercicio de la acción de disolución, parece oponerse a los deberes que la Dirección del Trabajo como órgano perteneciente a la Administración del Estado se encuentra obligado a promover, facilitar y proporcionar las garantías necesarias para el debido ejercicio de la libertad sindical, entendida ésta como un derecho constitucional de rango superior al simplemente legal.

DECIMO: A mayor abundamiento, el informe de fiscalización deja constancia que se investiga sobre la “legalidad de la constitución de la asociación de funcionarios” y ocurre que ello quedó plenamente zanjado por la sentencia de 11 de diciembre de 2015 que resolvió dejar firme la vigencia de la asociación en cuestión.

En la especie, la petición de la Dirección del Trabajo se funda en la mera constatación del hecho que la Asociación no contaría con el quórum necesario de socios para funcionar, pero ocurre que el número de socios actual es incluso mayor al que se consideró al declarar la vigencia de la asociación, por lo que en este caso en particular la sola constatación de que el número de los socios de la asociación gremial sería menor al quórum legal, no constituye una solicitud fundada en los términos del artículo 297 del Código del Trabajo.

UNDECIMO: Por otra parte, es necesario tener presente que no se ha cuestionado o sostenido el incumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias que rigen la organización, la cual se mantiene activa, por lo que acorde los fundamentos desarrollados precedentemente, la petición de disolución de la Asociación Nacional de Trabajadores de Gendarmería De Chile, será desestimada en todas sus partes.

DUODECIMO: Que las probanzas rendidas, han sido apreciadas en conciencia atento lo dispuesto en el artículo 297 del Código del Trabajo en relación con el artículo 62 de la Ley N° 19.296, y las no pormenorizadas en nada alteran lo ya razonado.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 5, 6, 19 y 20 de la Constitución Política de la República; artículos 212, 214, 292, 297 del Código del Trabajo, Ley 19.296; DFL. N° 2 de la Dirección del Trabajo; Convenios de la OIT N° 87, 98 y 151, Declaración



Universal de los Derechos Humanos y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, **SE DECLARA:**

I.- Que **SE RECHAZA**, la petición de disolución de la Asociación Nacional de Trabajadores de Gendarmería de Chile, RAF N° N° 9301.0276, deducida por la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago.

II.- Que, pese a haber resultado totalmente vencida la solicitante, no será condenada al pago de las costas de la causa, estimando que ha tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese a los correos electrónicos designados por los intervinientes y archívese en su oportunidad.

RUC: 21-4-0365226-9

RIT: M-2618-2021

Pronunciada por doña Daniela Ramírez Marambio, Juez Suplente del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago, a cuatro de diciembre de dos mil veintiuno, se notificó por el Estado Diario la resolución precedente.

